

Barranquilla, 23 de marzo de 2021

CLASE	: PROCESO ORD. LABORAL RAD No.080013105007 <u>2021-072-00</u>
Demandante	: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
Demandado	: HECTOR EMILIO AHUMADA CASTELLANOS

Informe secretarial: Señora juez, paso a su despacho el proceso de la referencia, comunicándole que, mediante auto fechado 09 de mayo del 2019, el Honorable Magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico Sala C, declaró falta de competencia y ordenó su reparto a los Juzgados Laborales del Circuito de Barranquilla. De igual manera se le informa que el apoderado se encuentra inscrito y vigente en el registro nacional de la rama judicial. Para lo de su conocimiento, sírvase proveer.

DAIRO MARCHENA BERDUGO
SECRETARIO

JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO BARRANQUILLA

CLASE	: PROCESO ORD. LABORAL RAD No.080013105007 <u>2021-072-00</u>
Demandante	: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
Demandado	: HECTOR EMILIO AHUMADA CASTELLANOS.

Evidenciado el anterior informe secretarial, se procede a examinar la demanda de la referencia y pronunciarse respecto de la admisión o inadmisión.

ANTECEDENTES

Mediante auto de fecha 09 de mayo del 2019, el Honorable Magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico Sala C, declaró falta de competencia argumentando que *“el conflicto suscitado entre las partes no versa sobre aquellos relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen está administrado por una persona de derecho público, sino por el contrario, con un trabajador del sector privado, se llega a la conclusión que el conocimiento de la reclamaciones que se susciten en relación con éste, corresponde a los jueces laborales”* y ordenó su reparto a los Juzgados Laborales del Circuito de Barranquilla, correspondiéndole por reparto a este despacho.

CONSIDERACION DE ORDEN FÁCTICO Y JUÍDICO

El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, dispone que la jurisdicción contenciosa administrativa *“esta instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado.”*

Por su parte, el artículo 83 ibídem, dispone que la jurisdicción contenciosa administrativa, *“juzga los actos administrativos, los hechos, las omisiones, las operaciones administrativas y los contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad de las entidades públicas y de las personas privadas que ejerzan funciones administrativas (...).”*

Así mismo, el artículo 132 del mismo estatuto, dispuso la competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia sobre los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo en los que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, siempre que la cuantía exceda de los 100 salarios mínimos legales mensuales.

Ahora bien, revisada la demanda lo que pretende la parte actora es:

- ✓ Que se declare la nulidad de la Resolución ISS 001751 de 30 de agosto de 2002 proferida por el ISS hoy Colpensiones, por medio de la cual se resuelve modificar la Resolución ISS 000626 de 25 de febrero del 2001, mediante la cual se resolvió reconocer una pensión de vejez a favor del señor AHUMADA CASTELLANOS HECTOR EMILIO
- ✓ Como consecuencia, se ordene al señor AHUMADA CASTELLANOS HECTOR EMILIO a devolver a favor de COLPENSIONES, lo pagado por concepto del reconocimiento de pensión de vejez a partir de la fecha de inclusión de pensionados del acto administrativo la Resolución ISS 001751 de 30 de agosto de 2002.

De lo anterior, se vislumbra que la entidad pública demandó su propio acto a través de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho conocida también como acción de lesividad, lo que pretende una decisión declarativa de acto nulo.

Sobre el tema en comento ha manifestado el Consejo de Estado¹ *“... Así las cosas, por acción de lesividad se entiende tanto el ejercicio de simple nulidad, o de la nulidad y*

¹ sentencia del 9 de julio de 2014 expediente 6600123310002009008702

restablecimiento del derecho, en ambos casos, con fundamentos en actos administrativos adoptados por la Nación o por las demás entidades públicas administrativas, las cuales impugna la entidad pública correspondiente persiguiendo los propósitos de una u otra acción...”.

También ha argumentado el Consejo de Estado² “... *la acción de lesividad busca la protección de la legalidad que se ha visto afectada por el acto administrativo viciado de nulidad expedido por ella misma, entonces dicha acción le ofrece a la administración la posibilidad de que en defensa del interés público y del ordenamiento jurídico y ante actos que vulneren este último, controvierta ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa sus propias actuaciones, a fin de sustraer del ordenamiento jurídico, el acto que considera vulnerado o espurio, empleando las mismas acciones (hoy medios de control) que se incoan para demandar por los administrados”.*

Igualmente, el Consejo de Estado en sentencia del 23 de abril de 2015 con radicación No. 11001032500020130180500 reiteró:

*“...Un ejemplo de la naturaleza reglada de la aludida facultad de la administración de demandar sus propios actos administrativos, es el artículo 97 de la ley 1437 de 2011, que al regular lo relacionado con la revocatoria de los actos de carácter particular y concreto en caso de ser contrario a la Constitución o la ley, en su incisos 2 y 3 establece que si es titular de la situación jurídica creada por un acto administrativo nieva el consentimiento para su revocatoria, **la autoridad deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo**, y obligatoriamente solicitar la suspensión provisional. Y es que los medios de control consagrados en la parte segunda del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, han sido determinados fijados y/o diseñados por el legislador, en ejercicio de su atribución y/o competencia, de estirpe constitucional, de libertad de configuración legislativa, y por lo tanto deben acatados por el operador jurídico sin ser desnaturalizados y mucho menos pueden ser transfigurados o cambiados por el arbitrio del demandante, dado que son mecanismo judiciales de creación legal y se encuentran contenidos en normas procesales de orden público y por consiguiente de obligatorio cumplimiento, cuya instrumentalización no puede quedar al antojo de las partes procesales”* Negrita del despacho.

² En auto 5 de abril del 2018, proceso 25000 2324 000 2011 00182 01

De acuerdo con lo anterior, se concluye que, en este caso, por tratarse de una controversia originada a partir de un acto administrativo expedido por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, cuya naturaleza jurídica es Empresa Industrial y Comercial del Estado y tiene por objeto la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida, así como siendo la acción de lesividad una acción propia de la jurisdicción contenciosa administrativa, es competente esa justicia en el conocimiento de la demanda presentada en contra del señor HECTOR EMILIO AHUMADA CASTELLANOS, en la que se pretende modificar la Resolución ISS 000626 de 25 de febrero del 2001, mediante la cual se resolvió reconocer una pensión de vejez a favor de éste.

De tal suerte, ésta agencia judicial se abstendrá de avocar su conocimiento atendiendo a la sujeción y garantía que se debe brindar a la elección del actor de cara a las normas referidas y, en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, se ordena que por secretaría sea remitido el expediente al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Disciplinaria, para que dirima el conflicto de competencia negativo que se plantea.

En virtud de las razones antes expuestas el JUZGADO SÉPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

RESUELVE:

PRIMERO: ABSTENERSE el despacho de asumir el conocimiento de este proceso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: En consecuencia, se ordena remitir el presente proceso al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA DISCIPLINARIA, a fin de que dirima el conflicto de competencia negativo planteado por este despacho judicial.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALICIA ELVIRA GARCIA OSORIO

Juez

JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA Barranquilla, 24-03-2021, se notifica auto de fecha 23-03- 2021 POR ESTADO N°_ El Secretario _____ DAIRO MARCHENA BERDUGO
--